



Un documento impulsado por Sam Altman plantea impuestos a la automatización

# OpenAI propone un nuevo «contrato social» para la Era de la inteligencia artificial

La irrupción de la inteligencia artificial en la economía global está acelerando un debate que durante años avanzó más lento que la tecnología. Pero esta vez, el impulso no proviene desde los gobiernos ni desde organismos internacionales, sino desde la propia industria. OpenAI publicó el Lunes el documento "Industrial Policy for the Intelligence Age: Ideas to keep people first", una propuesta de política pública que busca anticipar los efectos económicos y sociales del avance de la IA. El texto, liderado por su CEO, Sam Altman, incluye medidas como la creación de un fondo de riqueza pública financiado parcialmente por compañías tecnológicas, impuestos al trabajo automatizado, una semana laboral de 32 horas sin reducción salarial y sistemas de protección social que se activen automáticamente ante desplazamientos masivos de empleo. Si bien varias de estas ideas han sido discutidas previamente en círculos académicos y económicos, lo novedoso radica en quién las impulsa. OpenAI no solo es un

actor relevante en el desarrollo de estas tecnologías, sino uno de los principales protagonistas de su expansión global. El documento aparece en un momento estratégico. La compañía se prepara para una eventual salida a bolsa y enfrenta creciente escrutinio político en Estados Unidos, donde el Congreso analiza marcos regulatorios para la inteligencia artificial. En ese escenario, la propuesta también se interpreta como un intento por influir en la discusión antes de que las reglas sean definidas por otros actores. Más allá de esa dimensión, el diagnóstico que plantea el informe ha generado atención. Altman advierte que los sistemas actuales ya son capaces de ejecutar tareas complejas en tiempos significativamente menores, y que en el corto plazo podrían asumir funciones que hoy requieren meses de trabajo humano. También alerta sobre riesgos emergentes, como ciberataques avanzados o el uso indebido de estas tecnologías en ámbitos sensibles. La propuesta, sin embargo, deja interrogantes abiertas. Entre ellas, quién

supervisará a las empresas que lideran este desarrollo, cómo se financiarán los mecanismos planteados y qué rol tendrán los Estados en la implementación de estas políticas. El debate de fondo apunta a un cambio estructural: la necesidad de redefinir el contrato social en una economía donde la automatización podría alterar profundamente el empleo y la distribución de la riqueza. En ese contexto, la participación de las propias tecnológicas en la elaboración de soluciones plantea tanto oportunidades como tensiones.

Por ahora, lo claro es que la discusión ya no se limita al avance de la inteligencia artificial, sino a quién establece sus reglas.

